

UN PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE COLOMBIA POST COVID-19 y por qué es importante para los Estados Unidos.

Un informe del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia del Atlantic Council

COPRESIDENTES

Senador Ben Cardin (D-MD)
Senador Roy Blunt (R-MO)

MIEMBROS DISTINGUIDOS

Representante Gregory Meeks (D-NY)
Representante Dan Crenshaw (R-TX)
Representante Ruben Gallego (D-AZ)

CON

Jason Marczak, Camila Hernández, y Michel Janna





ADRIENNE ARSHT
LATIN AMERICA CENTER

El Adrienne Arsht Latin America Center (AALAC) amplía la comprensión de las transformaciones regionales a través de un trabajo de alto impacto que da forma a la conversación entre los legisladores, la comunidad empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación. Fundado en 2013, el centro se enfoca en el papel estratégico de América Latina en un contexto global, dándole prioridad a los temas políticos, económicos y sociales urgentes que definirán la trayectoria de la región ahora y en el futuro. Las líneas de programación incluyen: China en América Latina; la crisis de Venezuela; los lazos de México con Estados Unidos y el mundo; el futuro de Colombia; un Brasil cambiante; la prosperidad centroamericana; el combate contra la desinformación; cambios en patrones comerciales y modernización de las cadenas de suministro; el futuro post-COVID; el desarrollo caribeño; y el aprovechamiento de los recursos energéticos. Jason Marczak se desempeña como director del centro.

Este informe está escrito y publicado de acuerdo con la política del Atlantic Council sobre independencia intelectual. Los autores son los únicos responsables de sus análisis y recomendaciones. El Atlantic Council y sus donantes no determinan, ni respaldan ni defienden necesariamente ninguna de las conclusiones de este informe.

Atlantic Council
1030 15th Street NW, piso 12 Washington, DC 20005

Para obtener más información, visite www.AtlanticCouncil.org.

ISBN-13: 978-1-61977-204-5

Diciembre de 2021



Atlantic Council

ADRIENNE ARSHT
LATIN AMERICA CENTER

UN PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE COLOMBIA POST COVID-19 y por qué es importante para los Estados Unidos.

Un informe del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia del Atlantic Council

COPRESIDENTES

Senador Ben Cardin (D-MD)

Senador Roy Blunt (R-MO)

MIEMBROS DISTINGUIDOS

Representante Gregory Meeks (D-NY)

Representante Dan Crenshaw (R-TX)

Representante Ruben Gallego (D-AZ)

CON

Jason Marczak, Camila Hernández, y Michel Janna

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO Y TABLA DE RECOMENDACIONES	5
INTRODUCCIÓN	8
UNA ALIANZA HISTÓRICAMENTE EXITOSA	9
UN PLAN DE CUATRO PILARES PARA LA RECUPERACIÓN POST-COVID-19 EN COLOMBIA	10
Vacunación Masiva: Arranque de la Economía	11
Creación de Empleo: El Camino hacia el Crecimiento Inclusivo	12
Un Pacto Social más Sólido: Promover Mayor Estabilidad	17
Mejorar el Estado de Derecho, Implementar los Acuerdos de Paz, la Bueno Gobernanza, y la Protección de los Derechos	19
CONCLUSIÓN	23
COPRESIDENTES Y MIEMBROS DEL TASK FORCE	24
AGRADECIMIENTOS	26

RESUMEN EJECUTIVO

El 19 de junio de 2022, los Estados Unidos y Colombia celebrarán doscientos años de relaciones bilaterales. Históricamente, Colombia ha sido un aliado indispensable, sirviendo de ancla para las relaciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe (ALC) y colaborando con los Estados Unidos para abordar las necesidades regionales y globales. Acoge al mayor número de migrantes y refugiados venezolanos, lidera los esfuerzos de seguridad y defensa en Centro y Sud América, y juega un papel fundamental en la lucha mundial contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado.

La continuidad de la prosperidad de Colombia y de su papel como socio clave de los Estados Unidos depende, en parte, de la capacidad del país para recuperarse rápidamente del COVID-19. En 2020, los cierres y las restricciones a la movilidad provocaron una gran recesión en Colombia, agravando el desempleo, la pobreza y las desigualdades preexistentes. Con el apoyo de los Estados Unidos para la recuperación inclusiva y sostenible post COVID-19, Colombia estará en mejores condiciones de asociarse con Estados Unidos para promover los intereses comunes, particularmente en medio de los crecientes desafíos regionales y globales.

Este informe esboza una serie de acciones políticas que el consorcio de los Estados Unidos y Colombia podría tomar para acelerar la recuperación inclusiva y sostenible post COVID-19 en Colombia, fortaleciendo la alianza entre Estados Unidos y Colombia. Es un producto del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia del Atlantic Council, un grupo bilateral y multisectorial de expertos en los Estados Unidos y Colombia, copresidido por el senador Ben Cardin (D-MD) y el senador Roy Blunt (R-MO).

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se dividen en cuatro pilares estratégicos: acelerar la vacunación masiva; promover la inversión y la creación de empleo; fortalecer el pacto social de Colombia; y mejorar el estado de derecho, la implementación de los acuerdos de paz, la buena gobernanza y la protección de los derechos humanos. Avanzar en las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia sobre estos pilares salvaguardará los intereses fundamentales de seguridad, económicos, políticos y humanitarios de los Estados Unidos, y apoyará el camino de Colombia hacia una mayor paz interna, una democracia más fuerte y un crecimiento económico sostenible e inclusivo. A continuación, se describen las dieciséis soluciones políticas del grupo.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia

Vacunación Masiva: Arranque de la Economía

1

Aprovechar los compromisos anteriores de los Estados Unidos para compartir las vacunas COVID-19 a nivel mundial para aumentar las donaciones bilaterales a Colombia. Las donaciones directas evitarían los problemas de entrega y suministro a los que se enfrenta actualmente el Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas del COVID-19 (COVAX), garantizando un acceso oportuno y equitativo a las vacunas para los colombianos, especialmente en las zonas rurales, así como para los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. Los Estados Unidos también podría considerar la posibilidad de asignar vacunas a Venezuela para distribuir las en localidades colombianas con alta presencia venezolana.

Creación de Empleo: El Camino hacia el Crecimiento Inclusivo

2

Reforzar la capacidad de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC) de los Estados Unidos para movilizar más inversiones de los Estados Unidos en Colombia al

- a. Estudiar la necesidad de aumentar el presupuesto de la agencia para inversiones de capital y asistencia técnica para apoyar a las empresas en fase de crecimiento y la identificación y preparación de proyectos en Colombia;
- b. permitir la asociación con multilaterales y/u organizaciones en las que los Estados Unidos es accionista, para compartir las responsabilidades de diligencia debida; y
- c. fomentar el compromiso con las partes interesadas colombianas a nivel de ciudades y municipios, además del trabajo de la DFC con el gobierno nacional de Colombia.

3

Proporcionar garantías crediticias adicionales del gobierno estadounidense para apoyar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia y promover el crecimiento económico inclusivo. Asimismo, dar prioridad a la financiación de grandes proyectos de infraestructura y proyectos en sectores que beneficien a comunidades vulnerables e históricamente marginadas.

4

Promover oportunidades y espacios (por ejemplo, sesiones de estrategia, mesas redondas) para que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT), el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), y la DFC trabajen con expertos estadounidenses y colombianos en la materia para identificar y estructurar proyectos altamente financiables en Colombia.

5	<p>Incentivar la participación del sector privado estadounidense en los grandes proyectos de infraestructura de Colombia, instruyendo al Departamento del Tesoro y a la USTDA para que trabajen con empresas estadounidenses líderes en la industria para</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identificar los obstáculos a los que se enfrentan las empresas estadounidenses para comprometer capital o financiación en proyectos de infraestructuras; y b. presentar propuestas a la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) de Colombia sobre la forma de abordar los problemas de inversión.
6	<p>Explorar la adopción de una versión modernizada de los fondos empresariales como instrumento de la política exterior estadounidense hacia Colombia. Un posible fondo empresarial en Colombia debería</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adoptar planes de negocios más flexibles; b. establecer asociaciones con otras instituciones (por ejemplo, la DFC y la Corporación Financiera Internacional) para aprovechar las inversiones adicionales y las lecciones aprendidas de los fondos no estadounidenses; e c. incorporar programas de asistencia técnica dirigidos por organizaciones no gubernamentales.
7	<p>Trabajar con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para agilizar las aprobaciones sanitarias y fitosanitarias de los productos agrícolas colombianos con acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial (TPA) entre los Estados Unidos y Colombia de 2012. La creación de un mercado en los Estados Unidos para productos agrícolas aptos para la producción en territorios afectados por el conflicto apoyaría los esfuerzos de sustitución de cultivos y de erradicación de la coca entre los Estados Unidos y Colombia.</p>

Un Pacto Social Más Sólido: Promover una Mayor Estabilidad

8	<p>Priorizar, financiar y ampliar los programas dirigidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para apoyar a las mujeres, los afrocolombianos, los indígenas y los jóvenes en Colombia.</p>
9	<p>Explorar las crecientes necesidades financieras para apoyar los esfuerzos de Colombia para asistir y promover la inclusión socioeconómica de los casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos en su territorio.</p>
10	<p>Alentar a los donantes internacionales a que financien íntegramente las promesas de donaciones y aumenten la ayuda financiera en respuesta a la crisis regional de Venezuela.</p>
11	<p>La embajada de los Estados Unidos y la misión de USAID en Colombia, en colaboración con los organismos multilaterales, deberían proporcionar asistencia técnica a la Dirección Nacional de Planeación (DNP) de Colombia para mejorar sus bases de datos de beneficiarios y los sistemas de dispersión de pagos, asegurando así que los subsidios por COVID y pre-COVID lleguen efectivamente a los más necesitados.</p>
12	<p>Apoyar la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia a través de un programa de adscripción del Servicio de Rentas Internas (SRI) y/o de asistencia tecnológica para mejorar la trazabilidad del comercio y aumentar la digitalización de los procesos aduaneros. Una DIAN más fuerte es clave para luchar contra los esquemas de lavado de dinero y contrabando.</p>

Mejorar el Estado de Derecho, la Implementación de los Acuerdos de Paz, la Buena Gobernanza y la Protección de los Derechos Humanos

13	<p>Convocar a un grupo de trabajo binacional para informar sobre la futura asignación de recursos estadounidenses para estabilizar los territorios afectados por el conflicto, centrándose específicamente en</p> <ul style="list-style-type: none"> a. realizar una evaluación exhaustiva de la situación y de los resultados de los principales programas de estabilización en curso y respaldados por los Estados Unidos; b. evaluar el grado de interconexión entre los esfuerzos de estabilización existentes a nivel local, y proponer estrategias para aumentar la coordinación y unidad cuando sea necesario; y c. definir y avanzar en la adopción de métricas holísticas de éxito para la estabilización territorial que vayan más allá del total de los cultivos de coca y de la producción de cocaína.
----	--

14	<p>Continuar apoyando la implementación del acuerdo de paz de Colombia de 2016</p> <ul style="list-style-type: none">a. basándose en estudios e iniciativas respaldadas por los Estados Unidos (por ejemplo, la Matriz del Acuerdo de Paz del Instituto Kroc) para determinar la necesidad de financiación adicional de los Estados Unidos, en particular para los territorios más vulnerables de Colombia, es decir, los ciento setenta programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).b. trabajando con otros donantes internacionales para aumentar la coordinación y la complementariedad entre las diferentes fuentes de financiación.
15	<p>Apoyar los cambios en las políticas, las prácticas y la formación para reducir los incidentes de uso de la fuerza durante los encuentros entre la policía y los ciudadanos y mejorar la confianza de la comunidad en la policía colombiana.</p> <p>En concreto, USAID, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos podrían asociarse con las partes interesadas del país para formar a las fuerzas policiales en materia de derechos humanos, desescalada y violencia de género, e implementar sistemas de alerta temprana y nuevas tecnologías policiales para aumentar la responsabilidad, la transparencia y la legitimidad de la policía.</p>
16	<p>Continuar apoyando financieramente a la Fiscalía General de la Nación (AGO) de Colombia, asegurando la rendición de cuentas del apoyo estadounidense a través de la condicionalidad y de mecanismos claros de monitoreo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado deben también seguir proporcionando talleres técnicos y capacitación a la Fiscalía General de la Nación de Colombia para prevenir e investigar las violaciones de los derechos humanos.</p>

INTRODUCCIÓN

Las acciones de política exterior de los Estados Unidos durante la administración Joseph Biden-Kamala Harris podrían ayudar a definir las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe en los próximos años. Con los crecientes desafíos en la región —incluyendo el retroceso democrático, el creciente descontento social, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y las secuelas del COVID-19— Estados Unidos debería revigorizar sus relaciones con socios y aliados para promover la estabilidad y prosperidad hemisférica. El fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia debe ser una prioridad absoluta, ya que los efectos positivos repercutirán mucho más allá de Colombia.

Tal y como mencionó el presidente Biden, Colombia es la “piedra angular” de la política exterior estadounidense hacia ALC.¹ Durante décadas, la asociación entre los Estados Unidos y Colombia ha salvaguardado los intereses económicos, políticos, de seguridad y humanitarios de Estados Unidos en la región, y ha apoyado el camino de Colombia hacia una mayor paz, seguridad y bienestar.

Sin embargo, los recientes desafíos causados o agravados por el COVID-19 amenazan la estabilidad interna y las instituciones democráticas de Colombia, y pueden conducir a efectos indirectos no deseados en toda la región. Abordar conjuntamente estos retos es fundamental para la continuidad de la democracia, la seguridad y los logros de desarrollo de Colombia.

Al igual que muchos otros países de ALC, Colombia se vio muy afectada por el COVID-19, tanto en términos de infecciones como de muertes. El país impuso estrictos cierres y restricciones a la movilidad para frenar las transmisiones, lo que obstaculizó la actividad económica y condujo a una de las peores recesiones registradas. En 2020, la economía colombiana se contrajo casi siete puntos porcentuales, mientras que el desempleo superó el 21 por ciento. La pobreza aumentó del 35,7 por ciento en 2019 al 42,5 por ciento en 2020, revirtiendo los avances en la reducción de la pobreza en casi diez años. En cuestión de meses, 3,5 millones

de nuevos colombianos entraron en la pobreza, de los cuales 2,8 millones cayeron en la pobreza extrema.²

Estos reveses económicos, sumados a los agravios sociales preexistentes —servicios públicos ineficientes, percepción de insuficiencia en la aplicación del acuerdo de paz de 2016, promesas incumplidas del gobierno a comunidades vulnerables e históricamente marginadas, corrupción, violencia y crimen organizado— alimentaron una ola de protestas masivas a principios de 2021. Aunque en su mayor parte fueron pacíficas, algunas manifestaciones se intensificaron por el uso de la fuerza por parte de la policía, y se impregnaron de actividades delictivas, vandalismo y bloqueos, causando más de ochenta muertes y 1.500 millones de dólares en pérdidas económicas.³

El apoyo a la recuperación sostenible e inclusiva post COVID-19 en Colombia es fundamental para mantener el éxito del país y demostrar el compromiso de Estados Unidos con la democracia, la justicia social y la alianza entre los Estados Unidos y Colombia. Ahora es el momento de construir sobre más de dos décadas de exitosa asociación entre los Estados Unidos y Colombia y dedicar nuevos recursos para asegurar que las inversiones anteriores puedan seguir siendo la base para el futuro.

El Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia del Atlantic Council llama a un nuevo y ambicioso plan plurianual, bipartidista y binacional, diseñado tanto para abordar los problemas inmediatos a los que se enfrentan Colombia y la región— el COVID-19, la crisis de Venezuela, los crecientes problemas de derechos humanos, entre otros— como para promover la prosperidad, la democracia, la inclusión social y la creación de riqueza equitativa a largo plazo en Colombia. Esto ayudará a abordar las condiciones que desencadenan el malestar social y político, impulsando las contribuciones de Colombia a la estabilidad regional y su papel como uno de los socios globales más fuertes de Estados Unidos. Este informe esboza algunas de las estrategias que debería incluir dicho plan.

UNA ALIANZA HISTÓRICAMENTE EXITOSA

Durante su viaje a Colombia en octubre de 2021, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que la relación entre los Estados Unidos y Colombia “trasciende a cualquier administración o partido político” y evoluciona continuamente para fortalecerse progresivamente.⁴ Según el Secretario Blinken, las democracias cumplen “trabajando estrechamente con socios y aliados en los mayores desafíos a los que nos enfrentamos. Y eso es exactamente lo que están haciendo Estados Unidos y Colombia.”⁵

El mantenimiento y la ampliación de esta alianza ayudarán a abordar muchas necesidades globales, generando impactos positivos en las vidas de los ciudadanos estadounidenses, colombianos y de otras regiones. Con casi doscientos años de relaciones bilaterales y dos décadas de asociación en el marco del Plan Colombia, los siguientes ejemplos demuestran la posición de Colombia como uno de los aliados de los Estados Unidos más dispuestos y capaces en el mundo y en el hemisferio occidental.

- En el marco del Plan Colombia y de Paz Colombia, ambos países forjaron una alianza perdurable en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, la cual se materializó en la firma del acuerdo de paz de Colombia de 2016. Entre los años 2000 y 2015, Colombia gastó más de 130.000 millones de dólares para reducir los cultivos de coca, luchar contra el narcotráfico, fortalecer sus instituciones y combatir a los grupos armados ilegales.⁶ Desde el año 2000, Estados Unidos ha invertido casi 12.000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de Colombia por mejorar la seguridad, crear oportunidades económicas y construir instituciones estatales eficaces y legítimas.⁷ A pesar de estos esfuerzos, en 2020 el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron una expansión récord de 245.000 hectáreas y 1.010 toneladas métricas, respectivamente.⁸ Sin una mayor cooperación bilateral, estos problemas podrían obstaculizar la capacidad de Colombia para fortalecer la gobernabilidad y la transición hacia una paz sostenible.
- Los esfuerzos de Colombia por acoger y asistir a casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos ponen de manifiesto su creciente capacidad de liderazgo regional. En febrero de 2021, el gobierno ofreció una década de Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos afectados por el conflicto, concediéndoles acceso a un empleo formal y a servicios esenciales como la asistencia sanitaria y las vacunas del COVID-19. Colombia también se ofreció a acoger a más de cuatro mil refugiados afganos tras la salida de Estados Unidos de Afganistán, envió dieciséis toneladas de ayuda humanitaria crítica y treinta trabajadores de rescate a Haití tras el terremoto de agosto de 2021, y donó un millón de dólares a la comunidad caribeña (CARICOM) a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para apoyar los esfuerzos de vacunación.⁹
- Como importante aliado de los Estados Unidos en las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia se ha convertido en un contribuyente vital de experiencia en seguridad y un promotor de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la libertad económica en todo el mundo. En Centroamérica, concretamente, Colombia ha cooperado con los Estados Unidos desde 2013¹⁰ para formar a más de diecisiete mil policías y fiscales a través del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia. Colombia fue el primer país latinoamericano en convertirse en uno de los nueve socios globales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).¹¹ Al proporcionar conocimientos y formación en materia de desminado a los aliados y socios de la OTAN, Colombia ha contribuido a la lucha mundial contra el terrorismo, las amenazas a la ciberseguridad, la corrupción y otros problemas de seguridad.
- La sólida relación económica entre los Estados Unidos y Colombia debería seguir dando prioridad a la inversión extranjera directa (IED) y a la plena aplicación del TPA de 2012 entre Estados Unidos y Colombia. Los Estados Unidos es actualmente el mayor socio comercial de Colombia, quien continúa siendo uno de los pocos países sudamericanos que comercia más con Estados Unidos que con China. A medida que el compromiso económico de China en la región sigue aumentando, una asociación económica más sólida entre los Estados Unidos y Colombia podría ayudar a equilibrar la creciente participación y las inversiones de China en ALC.

El descontento generalizado con la democracia en ALC ha puesto en peligro las instituciones democráticas, sobre todo porque potencias extra-hemisféricas como China promueven cada vez más su forma de gobierno como más estable y productiva que el modelo democrático liberal de mercado abierto. Estas circunstancias hacen que las elecciones presidenciales y al Congreso de 2022 en Colombia sean un gran desafío para el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y ALC, y otorgan una mayor importancia al apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos de Colombia para fortalecer las instituciones democráticas nacionales.

Del mismo modo, la pronta y sostenible recuperación de Colombia del COVID-19 es fundamental para la estabilidad política y social en el país y en la región. Los Estados Unidos debe posicionarse como el socio preferido de Colombia en su recuperación post-pandemia para abordar los desafíos y reforzar las “ganancias” de una relación sólida en los años venideros.

UN PLAN DE CUATRO PILARES PARA LA RECUPERACIÓN POST-COVID-19 EN COLOMBIA

La pandemia del COVID-19 provocó la recesión económica más grave de Colombia en más de un siglo. Como se señaló anteriormente, la economía del país se contrajo un 6,8% en 2020 y las tasas de pobreza y desempleo se dispararon, alcanzando casi el 43% y el 21%, respectivamente. Los desafíos sociales y económicos estructurales de Colombia se hicieron aún más evidentes, ya que la informalidad laboral, la provisión ineficiente de bienes públicos, los cuellos de botella en las infraestructuras y la débil gobernanza local obstaculizaron la recuperación social y económica.

Dado que el gobierno del presidente Joe Biden apoya la recuperación post COVID-19 en ALC y trabaja para revigorizar y modernizar las alianzas de los Estados Unidos en la región, la asociación entre los Estados Unidos y Colombia debe ser una prioridad.

Estados Unidos debería: ayudar a restablecer la actividad económica sobre la base de los compromisos anteriores de proporcionar vacunas COVID-19 a Colombia; promover la inversión y la creación de empleo en Colombia en colaboración con instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la DFC y USAID para consolidar el libre mercado y la productividad como motores del crecimiento sostenible; proporcionar una asistencia técnica y financiera mayor y estratégica para garantizar la estabilidad social y política de Colombia; y reforzar las iniciativas existentes para impulsar las condiciones de seguridad, la capacidad del Estado y el Estado de derecho. A continuación, se describen los cuatro pilares estratégicos.



El Secretario de Estado Antony J. Blinken se reúne con la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores designada de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en el Departamento de Estado. (Octubre de 2021).

PILAR 1:**Vacunación Masiva: Arranque de la Economía**

En el 2020 y el 2021, Colombia aplicó estrictas cuarentenas y restricciones de movilidad para contener la propagación del COVID-19 y evitar el colapso del sistema sanitario. Sin embargo, dadas las altas tasas de empleo informal de Colombia (casi el 63% de la población activa), quedarse en casa no era viable para muchos hogares de bajos ingresos o vulnerables.¹² Por lo tanto, las medidas de bloqueo resultaron insostenibles y contribuyeron a aumentar la pobreza, la desigualdad y el descontento social.

La campaña de vacunación COVID-19 de Colombia se puso en marcha en febrero de 2021, relativamente tarde en comparación con sus pares regionales. Hasta el 20 de noviembre, el programa ha tenido buenos resultados, con un 48.9% de la población totalmente vacunada, según el Ministerio de Salud.¹³ A pesar de los grandes avances para garantizar una distribución equitativa de las vacunas en el país, las tasas de vacunación siguen variando entre las regiones. Los datos de julio de 2021 revelan que, en promedio, la cobertura de la vacuna es menor en los municipios rurales (25 por ciento) y en los municipios rurales remotos (23 por ciento) que en las grandes ciudades (30 por ciento).¹⁴ Sin embargo, la cobertura varía considerablemente de un departamento a otro, y los municipios rurales de algunas regiones (por ejemplo, Valle del Cauca, Santander y Atlántico) tienen mejores resultados que las ciudades.

El ritmo del programa de vacunación de Colombia se ha visto influenciado casi por completo por cuestiones de inventario,

más que por la infraestructura, la distribución o la capacidad de administración. Con una población de más de cincuenta millones, Colombia ha contratado setenta y seis millones de vacunas a través de canales multilaterales y bilaterales, pero sólo se han entregado 68,6 millones.¹⁵ El flujo continuo de vacunas es fundamental para la aplicación de vacunas de refuerzo, la inmunización de los migrantes y refugiados venezolanos y la consecución de una vacunación generalizada entre las comunidades vulnerables e históricamente marginadas, especialmente en las zonas rurales remotas.

Los Estados Unidos es la única nación productora que ha hecho donaciones bilaterales directas a Colombia, proporcionando un total de seis millones de dosis a partir del 16 de octubre de 2021 (2,5 millones de Johnson & Johnson y 3,5 millones de Moderna), suficientes para vacunar completamente a aproximadamente el 10 por ciento de la población elegible de Colombia.¹⁶

A pesar de estos avances, la escasez de suministros y los retrasos en los calendarios de entrega hacen que la vacunación masiva sea lenta. Casi el 22% de las entregas restantes (aproximadamente 16,5 millones de dosis) se recibirán a través del Mecanismo COVAX, un consorcio respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque la iniciativa trabaja para garantizar la distribución equitativa de las vacunas, las entregas han sido lentas, y la incertidumbre sobre las entregas futuras sigue siendo alta.

Pilar 1 - Recomendaciones para una Alianza Eficaz entre los Estados Unidos y Colombia

El Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia celebra el compromiso de los Estados Unidos de suministrar vacunas COVID-19 a nivel mundial, incluyendo a Colombia y otros países de ALC, de forma bilateral y a través de mecanismos multilaterales.

Los Estados Unidos puede enviar donaciones bilaterales adicionales de vacunas a Colombia. Las donaciones directas evitarían los problemas de entrega y suministro a los que se enfrenta actualmente el COVAX, asegurando un acceso oportuno

y equitativo a las vacunas para los colombianos, incluyendo las comunidades rurales y los casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos en suelo colombiano. Estados Unidos podría asignar vacunas para Venezuela (que actualmente no recibe vacunas COVID-19 estadounidenses) y proporcionarlas a Colombia para que las distribuya en localidades con gran presencia venezolana, llegando a los colombianos y a un mayor número de migrantes y refugiados.



Mujeres colombianas organizan ramos de flores para exportarlos al extranjero antes del Día de San Valentín. Estados Unidos es uno de los principales importadores de flores colombianas. REUTERS / Jaime Saldarriaga.

PILAR 2:

Creación de Empleo: El Camino hacia el Crecimiento Inclusivo

La pérdida masiva y repentina de puestos de trabajo en Colombia continúa siendo uno de los efectos más dramáticos de la recesión económica provocada por la pandemia. En mayo de 2021, el desempleo alcanzó un máximo del 20,9 por ciento y, a pesar de haber disminuido al 12,1 por ciento en septiembre de 2021, sigue estando por encima de sus niveles anteriores a la pandemia (10,5 por ciento en 2019).¹⁷ En los tres primeros meses de la crisis del COVID-19, se perdieron cinco millones de puestos de trabajo, y en septiembre de 2021 aún no se habían recuperado seiscientos

ochenta mil. Hasta la fecha, la recuperación del empleo se ha producido principalmente en el sector informal. Millones de colombianos siguen sin tener acceso a los servicios de seguridad social o a los programas de bienestar social en medio de una crisis sanitaria y económica mundial. Además, como se muestra en la Figura 1, la pérdida de empleo en Colombia ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, dada su alta tasa de participación en los sectores más afectados por el COVID-19 (turismo, restaurantes y servicios en general).

Para abordar el impacto del COVID-19 en los medios de vida de las personas, el gobierno colombiano implementó programas de transferencia de efectivo para las familias de bajos ingresos y garantías de crédito para las empresas. Estas iniciativas supusieron un esfuerzo fiscal de 6.500 millones de dólares entre marzo de 2020 y junio de 2021.¹⁸ Las transferencias de efectivo a los individuos y los subsidios a la nómina de las empresas se extenderán hasta finales de 2022 y 2021, respectivamente.

Estimaciones recientes sugieren que estos programas han evitado un aumento de la pobreza de 2,2 puntos porcentuales.¹⁹ Sin embargo, la longevidad de los mismos depende de la capacidad del DNP para mejorar las bases de datos de los beneficiarios y los sistemas de pago, a fin de garantizar la rápida entrega de los fondos del gobierno y la evaluación cuidadosa de las futuras cargas fiscales.

A mediano y largo plazo, la mejora sostenible de los medios de vida y el bienestar de las personas será el resultado de la promoción de un crecimiento económico inclusivo a través de nuevas oportunidades de empleo, en lugar de las transferencias gubernamentales. La creación de millones de nuevos puestos de trabajo requerirá esfuerzos en los tres ámbitos siguientes.

Proyectos de infraestructura a gran escala: Colombia debe dar prioridad a los proyectos que tengan un impacto material en la formación bruta de capital y las repercusiones positivas en otros sectores. Dadas las restricciones fiscales actuales, Colombia ha fomentado la participación del sector privado en dichos proyectos a través de asociaciones público-privadas (APP) como el plan de quinta generación (5G) para desarrollar la infraestructura de

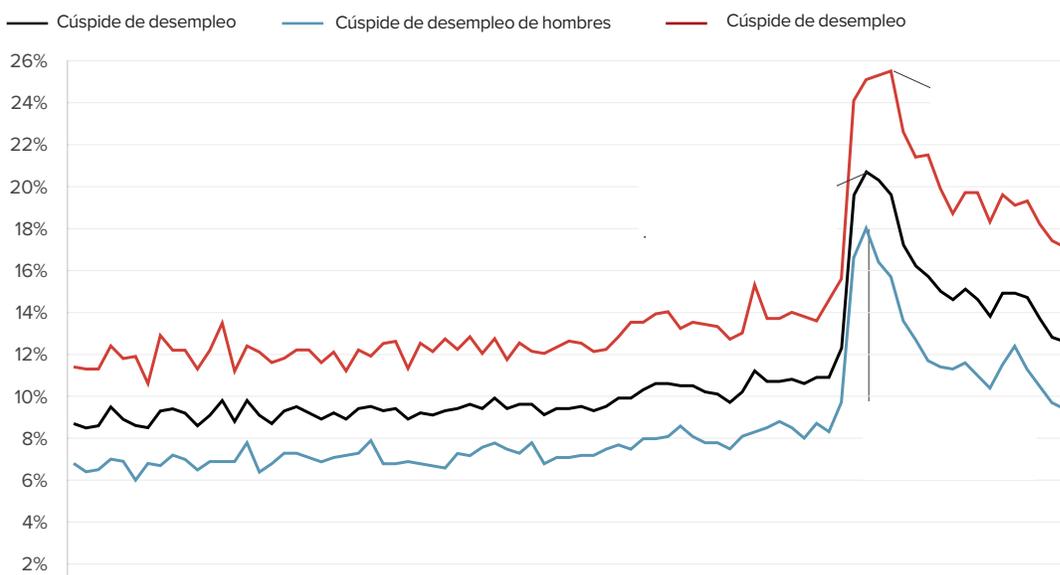
carreteras, aeropuertos, trenes y vías fluviales, que contempla una inversión de 4.800 millones de dólares durante la próxima década.²⁰ Centrar los esfuerzos en proyectos de infraestructuras que benefician a los PDET (es decir, a los municipios clasificados como especialmente afectados por la violencia) puede aportar importantes beneficios a corto y largo plazo. Además, la Iniciativa Build Back Better World (B3W), diseñada para cumplir con las necesidades de infraestructura de países en desarrollo, sirve como oportunidad para desarrollar colaboración con el DFC para crear más trabajos relacionados a la infraestructura y construcción.

Programas de construcción de viviendas: Colombia tiene un déficit de viviendas de aproximadamente 5,1 millones de unidades, por lo que la vivienda es un sector prometedor para atraer la inversión pública y privada.²¹ Históricamente, Colombia ha utilizado el desarrollo de la vivienda como política anticíclica, debido a su rápido impacto positivo sobre el empleo y la demanda agregada.

Turismo y servicios: La pandemia por el COVID-19 generó una fuerte caída en las actividades turísticas, lo que llevó a la pérdida de más del 76 por ciento de los puestos de trabajo en las industrias de venta al detal, entretenimiento, restaurantes y servicios de alimentación y hoteles de Colombia.²² A medida que las restricciones a los viajes internacionales comienzan a disminuir, la promoción de la industria del turismo permitirá a Colombia recuperar millones de puestos de trabajo, generar oportunidades de empleo adicionales y volver a las tendencias de crecimiento positivas anteriores a la pandemia. La estimulación de los sectores de servicios y turismo podría contribuir a una rápida recuperación del empleo y a un aumento de los ingresos de los trabajadores de clase media y baja, en particular de

Figura 1: Tasa de Desempleo en Colombia (%)

Empleos perdidos por COVID-19 han afectado desproporcionadamente a la mujeres dado su alta participación en los sectores más afectados por la pandemia (por ejemplo; turismo, restaurantes, servicios, etc.)



Fuente: "Información septiembre de 2021," Departamento Administrativo Nacional de Estadística, septiembre de 2021, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>.

las mujeres y los jóvenes, dado que dichos sectores no requieren competencias ni formación especializadas.

Nearshore: Las oportunidades de nearshore en ALC siguen creciendo a medida que las empresas consideran cada vez más la posibilidad de trasladar sus operaciones más cerca de sus mercados principales. Además de reforzar la resistencia de la cadena de suministro, el nearshore podría contribuir a promover normas de producción socialmente equitativas.²³ El McKinsey Global Institute identificó 4,6 billones de dólares en oportunidades de nearshore global en los próximos cinco años.²⁴ Dada su proximidad a los Estados Unidos y a otros mercados de ALC, Colombia se encuentra en una posición única para recibir inversiones de nearshore de empresas estadounidenses que buscan desprenderse de Asia para reducir los riesgos de futuras guerras comerciales u otros eventos disruptivos como el COVID-19. El Ministerio de Comercio

de Colombia, con el apoyo de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham), identificó cerca de seiscientas empresas en varios sectores en los que el nearshore a Colombia proporcionaría ventajas competitivas, incluyendo alimentos procesados, productos petroquímicos, productos farmacéuticos, tecnologías de la información y moda, entre otros.²⁵ De cara al futuro, ProColombia, la agencia gubernamental responsable de la promoción de las exportaciones y la IED, deberían seguir trabajando con las empresas estadounidenses para identificar y reducir las cargas legales, fiscales y reglamentarias existentes para la IED en estos sectores. Asimismo, el Ministerio de Educación podría ampliar los programas de educación bilingüe para hacer de Colombia un destino de reubicación más atractivo para las empresas estadounidenses.

Pilar 2 - Recomendaciones para una Alianza Eficaz entre los Estados Unidos y Colombia

El gobierno de los Estados Unidos puede apoyar el crecimiento a largo plazo de Colombia **creando un plan de compromiso más sólido con el sector privado** que permita a los inversores y a las empresas estadounidenses aprovechar todo el potencial de las oportunidades de inversión en Colombia.

La DFC debería desempeñar un papel fundamental en dicho plan. A pesar de estar bien posicionado para movilizar la inversión del sector privado estadounidense en Colombia, la DFC no ha cumplido con las expectativas iniciales debido al lento inicio de su Iniciativa de Crecimiento Estados Unidos-Colombia, un ambicioso plan lanzado en agosto de 2020 para atraer 5.000 millones de dólares en inversiones en Colombia.²⁶ Para aplicar plenamente la iniciativa, **la DFC debería colaborar con el Congreso de los Estados Unidos para determinar la necesidad y explorar formas de aumentar el presupuesto para las inversiones de capital, así como la asistencia técnica y los estudios de viabilidad.** Un presupuesto adicional para inversiones de capital permitiría a la agencia apoyar a más empresas en fase de crecimiento en Colombia, que de otro modo no podrían endeudarse, promoviendo el desarrollo inclusivo y avanzando en los objetivos de la política exterior estadounidense. Del mismo modo, el aumento del presupuesto para estudios de viabilidad, asistencia técnica o formación aceleraría la identificación y preparación de los proyectos, aumentando su impacto en el desarrollo o su sostenibilidad comercial, y atrayendo más inversiones privadas.

Del mismo modo, para los proyectos en los que sus capacidades son limitadas, la DFC debería considerar la posibilidad de asociarse con organismos multilaterales -como el BID, la CFI y/u otras organizaciones en las que los Estados Unidos es accionista- para compartir las responsabilidades de diligencia debida, al tiempo que aprovechan su amplio conocimiento, historial y redes en Colombia.

Paralelamente, **los Estados Unidos y/o Colombia podrían adoptar otros sistemas de garantía de crédito (SGC) para desbloquear los préstamos a las PYME** y promover el crecimiento económico inclusivo. En el marco de un SGC, el gobierno garantiza total o parcialmente el valor de un préstamo a una PYME, lo que mitiga el riesgo para el prestamista, incentivando a las instituciones financieras a aumentar el acceso al crédito a una base de clientes más amplia. En concreto, los Estados Unidos podría replicar y/o ampliar la cartera de la Autoridad de Crédito para el Desarrollo (DCA) de USAID/Colombia para apoyar los préstamos a las PYMES en más municipios de Colombia. Hasta julio de 2021, la DCA ha apalancado 55 dólares de financiación del sector privado por cada dólar de fondos de USAID comprometidos, por un total de 337 millones de dólares desde 2008.²⁷ Otros SGC podrían dar prioridad al acceso a la financiación de proyectos de infraestructuras locales y de proyectos en los sectores del turismo y servicios, dado su potencial para generar rápidamente puestos de trabajo que beneficien directamente a las mujeres, los afrocolombianos, los pueblos indígenas y los jóvenes.

Además de trabajar con el gobierno nacional de Colombia, **la DFC podría involucrar a las principales partes interesadas**

(sector público, sector privado y sociedad civil) en las grandes ciudades (por ejemplo, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín) **y en las localidades con altas tasas de desempleo** (por ejemplo, Cúcuta, Neiva, Quibdó, Riohacha y Valledupar) **para identificar y estructurar proyectos comercialmente sostenibles** que atraigan inversiones privadas adicionales en el desarrollo y promuevan la creación de empleo. **El Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el USTDA, el USDOT y el DOE podrían apoyar estos esfuerzos trabajando con la DFC para estructurar proyectos junto con expertos en la materia.** La participación a nivel de ciudades y/o municipios también mostrará el compromiso de los Estados Unidos de trabajar a nivel nacional y permitirá a las agencias sortear los cambios del gobierno federal tras las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia.

Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia también deberían incentivar la participación del sector privado estadounidense en los grandes proyectos de infraestructura de Colombia, que actualmente es muy baja. Por ejemplo, ninguna empresa estadounidense ha presentado una oferta para ninguno de los treinta grandes proyectos de APP de carreteras de Colombia adjudicados en los últimos seis años; en su lugar, los proyectos se adjudicaron a empresas de otros países, incluida China. Para solucionar esto e incentivar futuras inversiones, el Departamento del Tesoro y el USTDA **deberían trabajar con las empresas líderes del sector en Estados Unidos para identificar las barreras que impiden a los actores estadounidenses comprometer su capital o financiación en estos proyectos, y hacer propuestas a la ANI de Colombia sobre cómo solucionarlas.** Los obstáculos existentes podrían estar relacionados con cuestiones de estructuración, el equilibrio de los riesgos a los que se enfrentan los actores privados, las cláusulas contractuales más amplias o las preocupaciones por la seguridad y el estado de derecho. Una vez identificadas, las autoridades colombianas deberían abordar estas limitaciones para que los grandes proyectos de infraestructuras sean más atractivos para un mayor número de inversores estadounidenses y otros inversores estratégicos.

Por otra parte, los Estados Unidos debería considerar la adopción de una versión modernizada de **los fondos empresariales como instrumento de política exterior hacia Colombia y la región en general.** Estos fondos entregan dinero del gobierno estadounidense a inversiones de capital privado en mercados emergentes, promoviendo el espíritu empresarial en el extranjero y generando altos rendimientos financieros. Con la fundación de estos fondos a principios de la década de 1990, el gobierno estadounidense invirtió 1.200 millones de dólares en diecinueve países. Según USAID, los fondos originales obtuvieron aproximadamente 1.700 millones de dólares de ingresos netos de inversiones exitosas y recaudaron 6.900 millones de dólares de capital privado ajeno al gobierno estadounidense, alcanzando un total de 9.800 millones de dólares de todas las fuentes.²⁸

En general, el relativo éxito financiero y político de los fondos empresariales podría ampliarse y reproducirse en Colombia y otros países de ALC, aunque con modificaciones para satisfacer las

demandas y realidades regionales. En Colombia, concretamente, Estados Unidos podría revisar y ajustar los fondos empresariales basándose en las lecciones aprendidas de la experiencia de USAID con el Fondo Empresarial Tunecino Americano (TAEF), de 100 millones de dólares. Entre 2013 y 2020, el TAEF invirtió aproximadamente 36,7 millones de dólares en las PYME de todas las gobernaciones tunecinas, y seguirá invirtiendo activamente hasta 2028.²⁹

Un posible fondo empresarial en Colombia debería: adoptar planes de negocio más flexibles; establecer asociaciones con otras instituciones (por ejemplo, la DFC y la CFI) para atraer recursos adicionales y aprovechar las lecciones aprendidas de los fondos empresariales no estadounidenses; e incorporar a las organizaciones no gubernamentales para que proporcionen programas complementarios de asistencia técnica.

Por último, el gobierno estadounidense debería trabajar con Colombia para priorizar y agilizar la aprobación de los productos colombianos con acceso preferencial al mercado estadounidense en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia de 2012. En concreto, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos podría agilizar y armonizar los requisitos sanitarios y fitosanitarios para facilitar y acelerar la entrada de productos agrícolas en los Estados Unidos—especialmente los aptos para la producción en zonas afectadas por economías criminales, como el cultivo de coca y la minería ilegal. El establecimiento de un mercado en los Estados Unidos para los productos agrícolas que forman parte de los programas de sustitución de cultivos de coca supondría un avance significativo de las oportunidades económicas lícitas en las zonas rurales de Colombia y de los esfuerzos de erradicación de la coca entre los Estados Unidos y Colombia.³⁰



Protestas en Colombia en respuesta a reformas fiscales y descontento social generalizado. (Abril de 2021).

PILAR 3:

Un Pacto Social Más Sólido: Promover Mayor Estabilidad

En 2019, estallaron protestas masivas lideradas por sindicatos y grupos de estudiantes en toda Colombia y en muchos otros países de ALC (por ejemplo, Chile, Perú y Ecuador), reclamando mejoras en los sistemas de salud, educación, pensiones y judicial. Sin embargo, las protestas perdieron parte de su relevancia en 2020 debido al COVID-19 y a la aplicación de restricciones a la movilidad. No obstante, en abril de 2021 volvieron a estallar manifestaciones masivas, desencadenadas por un plan de reforma fiscal que aumentaba los precios de los productos de consumo básico. Las protestas, que duraron varios meses y se tornaron violentas en ocasiones, provocaron ochenta y cuatro muertes de civiles y policías, pérdidas económicas por un valor de 1.500 millones de dólares y un aumento de los casos de COVID-19, lo que agravó el tercer pico de COVID-19 en Colombia y añadió nuevas presiones al sistema sanitario.³¹

Las protestas se explican en parte por la incapacidad del gobierno para satisfacer las expectativas de los ciudadanos en medio de una difícil situación fiscal. Como resultado de estas tensiones, los movimientos populistas ganaron popularidad en el ámbito político, amenazando la posible aplicación de políticas sostenibles que son fundamentales para el crecimiento del país a largo plazo.

Es fundamental para la estabilidad social y política mejorar el pacto social existente para reducir efectivamente la pobreza y la desigualdad. En el futuro, Colombia debe asegurarse de que el gasto en subsidios llegue efectivamente a los necesitados, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente el 60 por ciento de los subsidios anteriores al COVID-19 se destinaron a los no pobres. A su vez, el país debe reforzar la protección de las personas mayores, ya que la cobertura de las pensiones de jubilación sólo beneficia al 25% de la población adulta. La informalidad laboral también sigue siendo un reto, ya que casi dos tercios de la población

trabajadora opera en el sector informal y carece de acceso a los servicios de seguridad social.³² El gobierno colombiano debería, entre otras cosas, seguir reduciendo los costes no salariales de la nómina, como las contribuciones a las cajas de compensación familiar, que obstaculizan la creación de empleo en el sector formal. Pasar de las cotizaciones a la seguridad social de tipo fijo a tipos progresivos reduciría el coste de la contratación de trabajadores con salario mínimo para los empleadores y, por tanto, incentivaría la formalización.³³

Un pacto social más fuerte es particularmente urgente dados los continuos desafíos sanitarios, económicos y sociales provocados por el COVID-19. Las recientes dislocaciones económicas han afectado de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, en particular a las mujeres, los afrocolombianos, los pueblos indígenas, los trabajadores poco cualificados y los jóvenes. Cualquier respuesta estatal a la pandemia y a sus consecuencias debería dar prioridad a estos grupos de individuos. Un pacto social más sólido también es primordial dada la afluencia masiva de venezolanos vulnerables a Colombia, y la carga que la migración continua supone para la provisión de bienes públicos y el equilibrio fiscal de Colombia.

Mejorar la red de seguridad social del Estado en medio de una emergencia sanitaria mundial implica inevitablemente costes adicionales. Para financiarlos, Colombia aprobó en septiembre de 2021 una nueva reforma tributaria que busca recaudar el 1,4% del producto interno bruto (PIB) en nuevos ingresos. Además de los cambios en el código tributario de Colombia, la DIAN necesita mejores capacidades para combatir la evasión fiscal y el contrabando. Esto no sólo fortalecerá las finanzas públicas, sino que también mejorará el estado de derecho y la capacidad del Estado.

Pilar 3 - Recomendaciones para una Alianza Eficaz entre los Estados Unidos y Colombia

El gobierno de los Estados Unidos debe continuar **priorizando, financiando y ampliando los programas liderados por USAID para apoyar a las mujeres, los jóvenes, los afrocolombianos y los pueblos indígenas en Colombia**. Las nuevas iniciativas deberían basarse en las lecciones aprendidas de los programas en curso de USAID en Colombia, incluyendo el recientemente lanzado FEMPOW (Mujeres Poderosas), la Actividad de Resiliencia Juvenil, la Actividad de Alianza Interétnica por la Paz, la Actividad de Territorios de Vida y el Programa de Liderazgo y Becas Afrocolombiano. El primer programa busca mejorar la vida de las mujeres colombianas aumentando su participación económica, promoviendo la igualdad de género y avanzando en la implementación de políticas y servicios relacionados con el género. El segundo es la primera actividad de USAID/Colombia centrada enteramente en los jóvenes, y busca proporcionar oportunidades de empleo y emprendimiento en treinta municipios urbanos y rurales mediante la asociación con los sectores público y privado, los centros de formación y las cámaras de comercio. La actividad de la Alianza Interétnica por la Paz trabaja con organizaciones comunitarias indígenas y afrodescendientes para fortalecer las estructuras de autogobierno, centrándose en la seguridad alimentaria y el liderazgo de mujeres y jóvenes. La actividad Territorios de Vida apoya a las organizaciones indígenas de la cuenca del Amazonas para que establezcan y gestionen legalmente las Áreas de Conservación Comunitaria Indígena, y el Programa de Liderazgo y Becas para Afrocolombianos tiene como objetivo aumentar el número de líderes de minorías étnicas emergentes que cursan estudios de posgrado en Estados Unidos.

Hacer frente a los costos sociales, políticos y económicos de la migración masiva de Venezuela a Colombia representa un reto importante para el gobierno del presidente Iván Duque y las futuras administraciones. Los Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente 1.900 millones de dólares en asistencia financiera para la crisis regional venezolana desde 2017, más que cualquier otro país.³⁴ Sin embargo, la crisis sigue estando en gran medida insuficientemente financiada. Los Estados Unidos **debería explorar la forma de aumentar su ayuda humanitaria y de desarrollo a Colombia mientras responde a las necesidades de los casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos en territorio colombiano**. La ayuda humanitaria adicional es especialmente necesaria para proporcionar asistencia alimentaria de emergencia, atención sanitaria, educación, servicios de protección y apoyo en materia de agua, saneamiento e higiene (WASH) a los migrantes venezolanos, los refugiados y las comunidades de acogida. La ayuda al desarrollo adicional es fundamental para apoyar la implementación del programa TPS, mantener los Centros de Integración para migrantes, refugiados y retornados de USAID y ampliar los esfuerzos para promover la inclusión socioeconómica a largo plazo de los migrantes, refugiados y retornados colombianos de Venezuela.

Países de acogida como Colombia han recibido 256 dólares per cápita en ayuda internacional por cada migrante o refugiado venezolano, menos de una décima parte de los 3.150 dólares que reciben los países de acogida por cada refugiado sirio.³⁵ El déficit de financiación es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que cada crisis desplazó a unos 5,5 millones de personas en sus primeros cinco años. Si el Plan de Respuesta a los Refugiados y Migrantes de Venezuela (PRRM) para 2021 se cumple en su totalidad, el importe total de la financiación para la crisis venezolana sería de aproximadamente 259 dólares por persona.³⁶ Sin embargo, al 22 de octubre de 2021, sólo se ha financiado el 34,5% del llamamiento (89 dólares por persona).³⁷

Los Estados Unidos debería alentar activamente a otros donantes a cumplir con las promesas de donación, aumentar su apoyo financiero y mantener la atención en la crisis regional de Venezuela. En junio de 2021, Canadá movilizó a la comunidad internacional para que prometiera casi 2.400 millones de dólares en fondos adicionales para ayudar a las personas afectadas por la crisis (957 millones de dólares en donaciones y 1.400 millones en créditos). El apoyo presupuestario directo a Colombia (y a otros países receptores) ayudará a reducir las presiones fiscales, a aliviar el descontento social y a atender las crecientes necesidades de los migrantes venezolanos, los refugiados y las comunidades de acogida.

La embajada de los Estados Unidos y la misión de USAID en Colombia pueden ayudar **a mejorar la eficacia de los programas sociales estructurales y relacionados con el COVID en Colombia mediante el fortalecimiento de las capacidades básicas del DNP de Colombia**, que administra los sistemas de información del gobierno para la asignación de las transferencias sociales (por ejemplo, Sisben 4.0). Este compromiso podría enmarcarse en un esfuerzo internacional, en el que organismos multilaterales como el Banco Mundial y/o el BID proporcionen asistencia técnica para mejorar las bases de datos de beneficiarios y los sistemas de pago y desembolso, y los Estados Unidos aporte capacidades tecnológicas para garantizar que los recursos públicos en Colombia lleguen efectivamente a los necesitados. Una alianza de este tipo también debería tratar de mejorar el sistema desigual de pensiones de Colombia y sus protecciones para los ancianos.

Por último, los Estados Unidos puede **apoyar la modernización de los sistemas de información fiscal y aduanera de la DIAN**. Una DIAN más fuerte no sólo reducirá la evasión fiscal y mejorará la recaudación de impuestos, sino que también ayudará a combatir los esquemas de lavado de dinero y contrabando asociados a grupos criminales. En concreto, Estados Unidos puede proporcionar asistencia y experiencia a través de un programa de comisiones de servicio o de rotación de puestos del IRS, así como colaboración tecnológica para aumentar la trazabilidad del comercio y la digitalización de los procesos aduaneros en puertos y aeropuertos.



Mayerli López, exguerrillera de la FARC, viverista y firmante del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, durante una visita a un vivero administrado por exguerrilleros de las FARC en Putumayo, Colombia. (Agosto de 2021). REUTERS / Luisa Gonzalez

PILAR 4:

Mejorar el Estado de Derecho, Implementar los Acuerdos de Paz, la Buena Gobernanza y la Protección de los Derechos

Para lograr una recuperación sostenible después del COVID, Colombia debe abordar las deficiencias históricas en términos de seguridad, presencia del Estado, buen gobierno y derechos humanos. Estos asuntos han regido las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia durante décadas y—a pesar de los avances considerables—aún queda mucho trabajo por hacer. Dado que la estabilidad de Colombia es clave para la seguridad y la prosperidad de la región, los Estados Unidos debería fortalecer su apoyo a los esfuerzos del gobierno colombiano para implementar plenamente el acuerdo de paz de 2016, y mejorar el estado de derecho, la buena gobernanza y la protección de los derechos humanos.

Estado de derecho y aplicación de los acuerdos de paz:

Históricamente, la débil presencia institucional y la falta de oportunidades económicas han permitido que las actividades ilegales y los grupos armados prosperen en las zonas rurales de Colombia. El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenía como objetivo mejorar la seguridad, la justicia, los derechos de propiedad de las tierras, los bienes públicos y las oportunidades económicas en las zonas rurales de Colombia devastadas por el conflicto.³⁸

A pesar de los constantes avances, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el ritmo de aplicación del acuerdo. Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales sobre la Paz de la Universidad de Notre Dame, la aplicación en 2020 avanzó más lentamente que en años anteriores, debido a un cambio de enfoque, pasando de los compromisos a corto plazo necesarios para sentar las bases de la aplicación a los objetivos a mediano y largo plazo que requieren ajustes institucionales más amplios y coordinación. El quinto informe de situación del Instituto Kroc, publicado en mayo de 2021, revela que el 28% de las estipulaciones del acuerdo se han aplicado en su totalidad, el 18% están en vías de aplicarse dentro del plazo establecido y el 54% han avanzado poco o nada en su aplicación (ver Figura 2).³⁹

Hasta la fecha, el punto seis del acuerdo de seis puntos, *implementación, verificación y respaldo público*, tiene el mayor número de estipulaciones completadas (55%), seguido del punto tres, *fin del conflicto* (49%). Por el contrario, el punto uno, *reforma rural integral*, y el punto dos, *participación política*, son los que tienen el menor número de estipulaciones completamente implementadas (4 y 12 por ciento, respectivamente).⁴⁰ En el gráfico

Figura 2 - Estado de Implementación de cada Punto del Acuerdo de Paz de Seis puntos de Colombia (Diciembre 2019-Noviembre 2020)

Punto/Etapa de Implementación (Porcentaje de Estipulaciones)	No Iniciado	Mínimo	Intermedio	Terminado
Punto 1 (Reforma Rural Integral)	18	64	13	4
Punto 2 (Participación Política)	34	34	20	12
Punto 3 (Fin del Conflicto)	14	19	19	49
Punto 4 (Solución al Problema de Drogas Ilícitas)	18	39	26	17
Punto 5 (Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto)	20	37	20	23
Punto 6 (Implementación, Verificación, y Aprobación Pública)	13	18	14	55

Fuente: "The Colombian Final Agreement in the Era of COVID-19: Institutional and Citizen Ownership is Key to Implementation," Peace Accords Matrix Barometer Initiative and Kroc Institute for International Peace Studies, 20 de mayo de 2021, <https://doi.org/10.7274/r0-cffp-qr07>.

que figura a continuación se describe el estado de implementación de cada punto del acuerdo.

En 2020, tres retos principales marcaron y prolongaron el calendario de aplicación del acuerdo. El primero fue el COVID-19 y las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno para frenar la propagación del virus. Esto no sólo exacerbó las desigualdades y vulnerabilidades existentes en los territorios, sino que también obstaculizó el avance de los procesos de consulta a nivel comunitario. El segundo gran desafío fue la asignación insuficiente de recursos financieros para la implementación. El tercer reto fue el recrudecimiento de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, así como los choques entre estos grupos y la fuerza pública, lo que dio lugar a casos de violencia contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y medioambientales y los excombatientes. En algunos territorios afectados por el conflicto, estos enfrentamientos, junto con la fragmentación cada vez más habitual de los grupos armados ilegales, también contribuyeron a un aumento de la violencia (por ejemplo, homicidios, masacres y desplazamientos forzados) contra la población civil a principios de 2021.⁴¹

Los avances en la implementación del acuerdo de paz, junto con la mejora de la presencia institucional y el estado de derecho, ayudarán a liberar todo el potencial del sector agrícola de Colombia, e impulsarán los esfuerzos para proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático, dos aspectos clave para la recuperación tras la crisis del COVID. A pesar de las condiciones favorables del suelo, el clima y la geografía, la productividad agrícola se encuentra en niveles subóptimos, lo que se explica en parte por la informalidad en la tenencia de la tierra. Aproximadamente el 52% de las propiedades rurales de Colombia carecen de títulos formales, lo que dificulta el acceso al crédito y la inversión en tecnología e infraestructuras a largo plazo. Además, las actividades ilegales en la Amazonía colombiana (por ejemplo, la minería ilícita, la ganadería, el cultivo de coca y el narcotráfico) no sólo agravan la deforestación y dificultan la producción regional de alimentos, la disponibilidad de agua y los esfuerzos globales para reducir las emisiones

de carbono, sino que también alimentan la violencia contra los activistas medioambientales y financian a grupos armados no estatales.⁴² USAID debería seguir colaborando con Colombia en la protección del medio ambiente y los esfuerzos de formalización de la propiedad de la tierra, una importante estipulación del acuerdo de paz. Colombia también necesita aumentar las inversiones en sistemas de riego y drenaje mediante financiación pública y privada y encontrar nuevas oportunidades para integrar la producción agrícola en las cadenas de valor mundiales.

El fortalecimiento de la seguridad, la justicia y el estado de derecho en las grandes ciudades de Colombia también es fundamental para garantizar una democracia y recuperación sostenible e inclusiva después del COVID-19. A pesar de que los niveles generales de violencia han disminuido en las últimas dos décadas y de que las tasas de homicidio se redujeron en un 70% entre 1991 y 2019, los recientes repuntes de la violencia y la percepción de inseguridad son preocupantes.⁴³ Entre enero y septiembre de 2021, las tasas de homicidio aumentaron un 10 por ciento en comparación con 2019, y el 40 por ciento del total de los homicidios se produjo en las grandes ciudades.⁴⁴ Cali experimentó el mayor número de casos, seguida de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. La seguridad, la justicia y el estado de derecho son condiciones previas para la inversión del sector privado en Colombia.

Buena gobernanza y derechos humanos: Como se ha mencionado anteriormente, la ola de violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales y medioambientales ha seguido extendiéndose por varias regiones. Las estimaciones del número total de homicidios varían, pero una recopilación de fuentes gubernamentales y de la sociedad civil ofrece un rango de entre 831 y 1.352 víctimas entre 2016 y 2021.⁴⁵ Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los asesinatos de líderes sociales se redujeron en un 49% en el primer trimestre de 2021, alcanzando los niveles más bajos desde que comenzó la implementación del acuerdo de paz en 2017.⁴⁶ Sin embargo, las amenazas de muerte y de violencia van en aumento, lo que sugiere que la violencia continúa, pero ha

evolucionado en forma e intensidad. La FIP también informa que los homicidios de excombatientes en procesos de reincorporación no han disminuido. En el primer cuatrimestre de 2021, veinticuatro personas en procesos de reincorporación fueron asesinadas; una más en comparación con el mismo periodo de 2020, y siete más que en 2019.⁴⁷

Entre abril y junio de 2021, las protestas, en gran medida pacíficas, en las ciudades más grandes de Colombia convergieron con el vandalismo, los incendios provocados y la destrucción de la propiedad, lo que llevó a enfrentamientos violentos entre los

manifestantes y las fuerzas de seguridad, y a docenas de casos de violaciones de los derechos humanos, según los informes de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos. Los casos de violaciones de los derechos humanos son inaceptables y constituyen una amenaza directa para la democracia, la sociedad civil y la paz. Abordar estas situaciones debería ser una prioridad absoluta para Colombia y para la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Colombia.

Pilar 4 - Recomendaciones para una Alianza Eficaz entre los Estados Unidos y Colombia

Los Estados Unidos debe seguir colaborando con Colombia para mejorar la seguridad y construir instituciones estatales eficaces y legítimas en las zonas rurales y urbanas, implementar el acuerdo de paz de 2016, luchar contra los grupos armados ilegales y las drogas ilícitas, y proteger a las poblaciones vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales.

A corto plazo, los Estados Unidos y Colombia deberían convocar un grupo de trabajo binacional independiente con tres mandatos específicos para informar sobre la asignación de los futuros recursos estadounidenses para la estabilización. En primer lugar, **el grupo debería elaborar una evaluación exhaustiva del estado y los resultados de los principales programas en curso y respaldados por los Estados Unidos para promover la estabilidad en las zonas afectadas por el conflicto**, como las Zonas Futuro, Paz con Legalidad, los PDET y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), entre otros. Dicha evaluación ayudará a garantizar una intersección eficiente entre la seguridad y el desarrollo de acuerdo con el Marco para la Estabilización de los Estados Unidos desarrollado por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y USAID en 2018.⁴⁸ Las intervenciones existentes y nuevas no sólo deben promover la seguridad civil, sino también prestar servicios básicos (educación, atención sanitaria, agua y saneamiento, etc.) y aumentar las oportunidades económicas, apoyando a las comunidades vulnerables e históricamente marginadas y reforzando la legitimidad del Estado.

En segundo lugar, el grupo de trabajo debería **evaluar el grado de unidad y coordinación entre los programas de estabilización existentes**, especialmente a nivel subnacional, y proponer mejoras cuando sea necesario. Garantizar la coordinación y la unidad efectivas entre los esfuerzos y los actores es fundamental para reducir los niveles de violencia y consolidar la estabilidad en las zonas afectadas por el conflicto, lo que en última instancia producirá resultados más tangibles y duraderos para los contribuyentes estadounidenses. Por último, el tercer mandato del grupo debería **ser establecer y avanzar en la adopción de métricas más holísticas para el éxito bilateral en términos de estabilización territorial**. Estas métricas deberían ir más allá de los estrechos indicadores de éxito, incluyendo la producción total de cocaína y los cultivos de coca, que han definido históricamente las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia.

La asistencia y la cooperación internacionales siguen siendo fundamentales para el éxito de la implementación del acuerdo de paz de 2016. De cara al futuro, Estados Unidos **debe seguir apoyando los esfuerzos de implementación del acuerdo de paz en Colombia**, informando y optimizando la asignación de la ayuda futura estadounidense en base a los resultados de los estudios e iniciativas respaldados por los Estados Unidos, como la Matriz del Acuerdo de Paz del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame.

Los Estados Unidos y Colombia podrían convocar una conferencia de donantes internacionales para apoyar la implementación de los acuerdos de paz, con la participación de otros países donantes que apoyan la implementación de los acuerdos (por ejemplo, Canadá, Reino Unido y países de la Unión Europea), instituciones financieras internacionales

como el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas. La conferencia es también una oportunidad para adoptar estrategias que promuevan la coordinación y la complementariedad entre las diferentes fuentes de financiación. Los recursos y esfuerzos adicionales resultantes de esta iniciativa deben dirigirse a los territorios más vulnerables de Colombia, es decir, a las dieciséis regiones del PDET señaladas en el acuerdo, que comprenden ciento setenta municipios.

Los Estados Unidos debe **trabajar con Colombia para implementar cambios en las políticas, prácticas y capacitaciones policiales para reducir los incidentes de uso de la fuerza y mejorar la confianza de la comunidad en la policía**. La sección 660 de la Ley de Ayuda Exterior permite a las agencias estadounidenses proporcionar capacitación en materia de derechos humanos, estado de derecho, lucha contra la corrupción y promoción de las funciones de la policía civil que apoyen la democracia. En Colombia, USAID, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa están bien posicionados para asociarse con partes interesadas en el país (el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil) para capacitar a la Policía Nacional de Colombia en materia de derechos humanos, técnicas de distensión, y la violencia de género.⁴⁹ Estos programas deben basarse en entrenamientos policiales/militares previos de los Estados Unidos en Colombia y aprovechar las lecciones aprendidas de los entrenamientos policiales estadounidenses sobre derechos humanos en Centroamérica (2018) y la prevención de la violencia de género en la República Dominicana (2021).⁵⁰

El USAID, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa también podrían apoyar los esfuerzos de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional de Colombia, creada en julio de 2021 y dirigida por un antiguo consultor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para informar sobre las políticas policiales de prevención, reducción y respeto de los derechos humanos. Por otro lado, las agencias estadounidenses podrían apoyar la aplicación de sistemas de intervención temprana para detectar y abordar la mala conducta de los agentes y reforzar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos —así como la adopción de tecnologías innovadoras en el ámbito policial para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia y reconstruir la percepción de legitimidad y confianza de la policía en Colombia.

Los Estados Unidos debe **continuar apoyando financieramente a la Fiscalía General de la Nación (AGO) de Colombia con condicionalidad y mecanismos claros de monitoreo** para garantizar que los recursos estadounidenses se utilicen efectivamente en la resolución y prevención de violaciones de derechos humanos. Asimismo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos—a través de su Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP), y en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado—debe continuar **proporcionando talleres técnicos y capacitaciones a la AGO colombiana** para investigar las violaciones de los derechos humanos, así como incluirla como un actor clave en las investigaciones criminales transnacionales.

CONCLUSIÓN

Con más de dos décadas de exitosa cooperación, Colombia es uno de los aliados más cercanos y capacitados de Estados Unidos en la región. El fortalecimiento de esta relación estratégica y el apoyo a la recuperación de Colombia en el marco del COVID-19 contribuirán significativamente a la estabilidad regional en medio de los crecientes desafíos globales.

Para fomentar la recuperación inclusiva y sostenible post COVID-19 en Colombia, la alianza entre los Estados Unidos y Colombia debería acelerar el despliegue de vacunas, promover la inversión y la creación de empleo, abordar las tensiones sociales y políticas y mejorar la seguridad, la capacidad del Estado, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

Un flujo constante de vacunas a Colombia apoyado por los Estados Unidos contribuirá a la inmunización y recuperación del COVID-19 de los migrantes y refugiados venezolanos, así como

de las comunidades vulnerables e históricamente marginadas, en particular en las zonas rurales remotas. También permitirá a Colombia abordar otros problemas acuciantes, como son el descontento social, la deuda pública y el déficit fiscal. La promoción de la inversión y la creación de empleo por parte de los Estados Unidos acelerará la recuperación económica de Colombia, reducirá la presión sobre los servicios y programas de seguridad social y estimulará el espíritu empresarial y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Al apoyar la ampliación de los programas de apoyo a las mujeres, a los afrocolombianos, a los pueblos indígenas, a los migrantes, a los refugiados y a los jóvenes, la asociación entre los Estados Unidos y Colombia abordará los agravios preexistentes y promoverá la estabilidad a largo plazo. Por último, la ayuda a los esfuerzos de Colombia para estabilizar los territorios afectados por el conflicto y aplicar plenamente el acuerdo de paz de 2016, reforzará la legitimidad del estado, el estado de derecho, la buena gobernanza y la protección de los derechos humanos.



Una trabajadora médica prepara una inyección con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en la Clínica Colombia en Bogotá, Colombia. (Febrero de 2021). REUTERS / Luisa González.

US-COLOMBIA TASK FORCE

COPRESIDENTES

El Honorable Ben Cardin
Senador de EE.UU. (D-MD)
Congreso de EE.UU.

El Honorable Roy Blunt
Senador de EE.UU. (R-MO)
Congreso de EE.UU.

MIEMBROS ESPECIALES:

El Honorable Gregory Meeks
Representante de los
Estados Unidos (D-NY)
Congreso de EE.UU.

El Honorable Dan Crenshaw
Representante de los
Estados Unidos (R-TX)
Congreso de EE.UU.

El Honorable Ruben Gallego
Representante de los
Estados Unidos (D-AZ)
Congreso de EE.UU.

DIRECTOR

Jason Marczak
Director, Adrienne Arsht
Latin America Center
Atlantic Council

COORDINADORA

Camila Hernández
Directora Asistente, Adrienne Arsht
Latin America Center
Atlantic Council

MIEMBROS

Sr. Felipe Ardila
Principal
Tinello Capital

Dr. Cindy Arnson
Directora, Programa de América Latina
Woodrow Wilson International Center for Scholars

Sr. Rand Beers
Ex-Secretario Titular de Seguridad Nacional
Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Emb. William Brownfield
Ex-Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales
de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (2011-2018),
Departamento de Estado de EE.UU.; *Ex-Embajador de los*
Estados Unidos en Colombia (2007-2010); Venezuela (2004-
2007), y Chile (2002-2004); Asesor Principal no residente,
Programa de las Américas Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales.

Sr. Andrés Cadena
Socio Principal
McKinsey & Company

Min. Mauricio Cárdenas
Ex-Ministro de Hacienda y Crédito Público (2012 – 2018); Ex-
Ministro de Minas y Energía
(2011 – 2012)
República de Colombia

Sr. Stephen Donehoo
Socio Director
McLarty Associates

Sra. Catalina Escobar Restrepo
Fundadora y Presidente
Fundación JuanFe

Embajadora Marlene Fernández
Ex Embajadora de Bolivia en Italia (2003 – 2004) y los
Estados Unidos (1999-2002); Vicepresidente de Asuntos
Gubernamentales
Arcos Dorados – McDonald's América Latina

Sra. Muni Jensen
Asesor Senior
Albright Stonebridge Group

Min. María Claudia Lacouture
Ex-Ministra de Comercio, Industria, y Turismo (2016-2017),
Republica of Colombia; Director Ejecutivo
AmCham Colombia

Sra. María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva
Fundación Ideas para la Paz

Sr. Bruce Mac Master
Presidente
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Embajador P. Michael McKinley
Ex-Embajador de los Estados Unidos en Brasil (2017-2018),
Afganistán (2014-2016), Colombia (2010-2013) y Perú (2007-
2010); Consejero Superior
The Cohen Group

Sr. Luis Fernando Mejía

Exministro de Planificación (2017-2018), República de Colombia; Director Ejecutivo Fedesarrollo

Sr. Alejandro Mesa

Socio BakerMcKenzie

Juan Esteban Ordúz

Presidente Federación Colombiana del Café - Subsidiaria Norteamericana de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Roger Noriega

Ex Subsecretario de Estado de EE. UU. para el hemisferio occidental (2003-2005), Departamento de Estado de Estados Unidos; Ex Embajador de EE. UU. ante la Organización de Estados Americanos (2001-2003).

Anne Patterson

Ex Embajadora de Egipto, Pakistán (2007- 2010), Naciones Unidas (2005), Colombia (2000-2003) y El Salvador (1997-2000).

Kristie Pellecchia

Ex Asesora para el hemisferio occidental de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) en Estados Unidos; Principal Pellecchia Internacional

Alejandro Santo Domingo

Presidente Grupo Santo Domingo

Michael Shifter

Presidente Inter-American Dialogue

Arturo Valenzuela

Ex subsecretario de Estado de EE. UU. Para el hemisferio occidental (2009-2011); Departamento de estado de los Estados Unidos; Ex Asistente especial del presidente y director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional (1999-2000); Profesor Emérito de Gobierno, Universidad de Georgetown.

Kevin Whitaker

Ex Embajador de Colombia (2014-2019), ex subsecretario de Estado para América del Sur, Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos

AGRADECIMIENTOS

Acerca de los Autores

Michel Janna es el presidente de AMV Colombia, la organización autorreguladora de los mercados de valores y de divisas en Colombia. Tiene más de veinte años de experiencia en puestos del sector público y privado relacionados con temas económicos y financieros de América Latina. Janna se ha desempeñado como director general de crédito público en el Tesoro Nacional de Colombia; como vicepresidente de gestión de riesgos y asesoría para soberanos en Goldman Sachs, Nueva York; como director financiero (CFO) de Cenit, una empresa del Grupo Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia; y como especialista en estabilidad financiera en el Banco Central de Colombia. Ha sido miembro de la junta directiva de varias empresas e instituciones financieras. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Northwestern, y un máster y una licenciatura en Economía de la Universidad de los Andes.

Camila Hernández es subdirectora del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, donde dirige el trabajo del centro sobre México, Colombia y el Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia. Ha sido coautora y editora de informes sobre la alianza estratégica entre los Estados Unidos y Colombia y el futuro energético de Colombia. Camila comenta regularmente las cuestiones políticas y económicas que afectan a las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia para los principales medios de comunicación de Colombia y los Estados Unidos. Antes de incorporarse al Atlantic Council, trabajó en el World Resources Institute y en Human Rights Watch. Posee una licenciatura en Gobierno y Economía de la Universidad de Georgetown. Originaria de Colombia, Camila es un hablante nativo de español e inglés, y domina el francés.

About the Center Director

Jason Marczak es el director del Adrienne Arsht Latin America Center, incorporándose al Centro en 2013 para su puesta en marcha. Cuenta con más de veinte años de experiencia en economía, política y desarrollo regionales, y trabaja con responsables políticos y líderes del sector privado de toda la región para elaborar políticas públicas. Marczak también es profesor adjunto en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington desde 2016. Entre sus cargos anteriores, se desempeñó como director de política de Americas Society/Council of the Americas en Nueva York y cofundador de la revista Americas Quarterly. Marczak es un colaborador habitual en inglés y español de los principales medios de comunicación, y un orador muy solicitado, y ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos sobre acontecimientos regionales clave. Posee una licenciatura de la Universidad de Tufts y una máster en asuntos internacionales y economía de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul Nitze de la Universidad Johns Hopkins.

Acerca del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia

Este es el tercer informe del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia del Atlantic Council, un grupo de legisladores de alto nivel, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil de los Estados Unidos y Colombia, copresidido por el senador Ben Cardin (D-MD) y el senador Roy Blunt (R-MO). Además del liderazgo bipartidista, el grupo cuenta con miembros bipartidistas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos: El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks (D-NY), el representante Dan Crenshaw (R-TX) y el representante Rubén Gallego (D-AZ).

Desde su fundación en 2017, el Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia ha trabajado para fortalecer los lazos económicos y diplomáticos entre los Estados Unidos y Colombia. Su primer informe, publicado en 2017, desarrolló una hoja de ruta para el compromiso de Estados Unidos con Colombia tras el acuerdo de paz de 2016. El segundo, lanzado en 2019, proporcionó una evaluación exhaustiva de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, creando un plan modernizado para la relación bilateral.

A continuación, se enumeran los miembros del grupo de trabajo que han decidido que sus nombres se asocien a este informe. Since its foundation in 2017, the US-Colombia Task Force has worked to strengthen economic and diplomatic ties between the United States and Colombia.

Acknowledgments

Queremos agradecer a Adrienne Arsht por su generoso apoyo, sin el cual la labor del Grupo de Trabajo Estados Unidos-Colombia no sería posible. Un agradecimiento especial al Senador Cardin (D-MD) y al Senador Blunt (R-MO) por su liderazgo bipartidista como copresidentes del grupo. Igualmente agradecemos al Presidente Gregory Meeks (D-NY), al Representante Dan Crenshaw (R-TX) y al Representante Rubén Gallego (D-AZ) por sus contribuciones al informe y su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia.

Gracias a los miembros del grupo de trabajo por su experiencia, ideas y dedicación, evidentes a lo largo de todo el informe.

De igual manera, deseamos agradecer a Ignacia Ulloa y Willow Fortunoff por sus contribuciones en materia de investigación y redacción; a Andrea Trujillo por sus aportes valiosos; a Susan Cavan y Jeff Fleischer por su ayuda editorial; a Donald Partyka por su apoyo en materia de diseño; y a Carolina Urdaneta por sus servicios de traducción.

Por último, un agradecimiento especial a Alyssa Anderson, Carol Brey, Daniel Burgess, José Contreras, Kenneth Depew, Richard Eddings, Sophia Lafargue, Tom Melia, Amanda Peper, Habiba Shebita, Michelle Shevin-Coetzee, Hannah Schwartz y Debbie Yamanda por facilitar la cooperación inquebrantable de nuestros copresidentes del grupo de trabajo y de los miembros de la Cámara.

REFERENCIAS

- 1 Joe Biden, "Reconstrucción de Alianza con Colombia Será Una de Mis Prioridades," *Tiempo*, 7 de octubre de 2020, <https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/elecciones-en-estados-unidos-que-dice-joe-biden-sobre-colombia-541912>.
- 2 José Manuel Restrepo Abondano, "Marco Fiscal de Mediano Plazo," Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 21 de julio de 2021, https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-165808%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
- 3 "Listado de las 80 Víctimas de Violencia Homicida en el Marco del Paro Nacional al 23 de Julio," INDEPAZ, última actualización el 23 de julio de 2021, <http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/>; Luis Fernando Mejía, "Tendencia Económica Editorial: Costos Económicos del Paro Nacional," Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, 17 de Junio 2021, <http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/217-junio-2021/>.
- 4 "Secretary Antony J. Blinken Remarks at the U.S.-Colombia High-Level Dialogue," Departamento de Estado de EE.UU., 21 de octubre de 2021, <https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-remarks-at-the-u-s-colombia-high-level-dialogue/>.
- 5 Ibid.
- 6 "Plan Colombia: Balance de los 15 Años," Departamento Nacional de Planeación, 2015, https://sinergia.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/PLAN_COLOMBIA_Boletin_180216.pdf.
- 7 <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43813>.
- 8 "ACTUALIZADO: ONDCP Releases Data on Coca Cultivation and Potential Cocaine Production in the Andean Region," White House, press release, 16 de julio de 2021, <https://www.whitehouse.gov/ondcp/briefing-room/2021/07/16/ondcp-releases-data-on-coca-cultivation-and-potential-cocaine-production-in-the-andean-region/>.
- 9 "Colombia Sends to Haiti 16 Tons of Humanitarian Aid Following Devastating Earthquake," Embajada de Colombia en los Estados Unidos, 16 de agosto de 2021, <https://www.colombiaemb.org/post/colombia-sends-to-haiti-16-tons-of-humanitarian-aid-and-30-rescue-workers-following-devastating-earthquake/>; "Colombia Dona un Millón de Dólares para Vacunación en Países del CARICOM," Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 21 de julio de 2021, <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-dona-millon-dolares-vacunacion-paises-caricom>.
- 10 "Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs: Colombia Summary—United States Department of State," Departamento de Estado de EE.UU., 1 de marzo de 2021, <https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/colombia-summary/>.
- 11 "Relations with Colombia," North Atlantic Treaty Organization, última actualización 17 de junio de 2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_143936.htm.
- 12 Luis Fernando Mejía, et. al., "Rigideces del Mercado Laboral en Colombia: Tendencias, Perspectivas y Recomendaciones," en *Descifrar El Futuro: La Economía Colombiana en los Próximos Diez Años*, Fedesarrollo, (Penguin Random House, abril de 2021), págs.261-319; Jorge Alvarez and Carlo Pizzinelli, "COVID-19 and the Informality-Driven Recovery: The Case of Colombia's Labor Market," Fondo Monetario Internacional, septiembre de 2021, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/17/COVID-19-and-the-informality-driven-recovery-the-case-of-colombia-s-labor-market-465831>.
- 13 Asumiendo que cada persona necesita dos dosis. "Vacunación contra COVID-19," Ministerio de Salud y Protección Social, último acceso el 20 de noviembre de 2021, <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx>.
- 14 <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/asi-va-la-mision-de-vacunar-al-campo-en-colombia/>.
- 15 "¿Cuántas Vacunas Contra COVID-19 han Llegado a Colombia?" Vacunación en Colombia, última actualización el 6 de octubre de 2021, <https://vacunacoronavirus.canalinstitucional.tv/cuantas-vacunas-han-llegado-colombia>.
- 16 U.S. International COVID-19 Vaccine Donations Tracker—Updated as of October 16," KFF Global Health Policy, última actualización 16 de octubre de 2021, <https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/u-s-international-covid-19-vaccine-donations-tracker/#recipient-country>.
- 17 "Información Agosto 2021," Departamento Administrativo Nacional de Estadística, agosto de 2021, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>; "Principales Indicadores del Mercado Laboral," Departamento Administrativo Nacional de Estadística, diciembre de 2019, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bo_empleo_dic_19.pdf.
- 18 Jesús Antonio Bejarano Rojas, "¿Qué hay que Hacer para Lograr una Reactivación Sostenible?" Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junio de 2021, <https://www.anif.com.co/wp-content/uploads/2021/05/jesus-bejarano-minhacienda.pdf>. COP 24.6 trillones a 3750 COP por USD.
- 19 Abondano, "Marco Fiscal de Mediano Plazo."
- 20 Rojas, "¿Qué hay que Hacer para Lograr una Reactivación Sostenible?"
- 21 "Déficit Habitacional," Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2 de septiembre de 2021, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/deficit-habitacional>.
- 22 "Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2020," Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), julio de 2021, https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Illicitos_2020.pdf.
- 23 Richard Feinberg, "Widening the Aperture: Nearshoring in our 'Near-Abroad,'" Wilson Center Latin America Program, abril de 2021, <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/WideningTheApertureNearshoringInOurNearAbroadRichardEFeinbergApril2021.pdf>.
- 24 Susan Lund, et. al, "Risk, Resilience, and Rebalancing in Global Value Chains," McKinsey & Company, 6 de agosto de 2020, <https://www.mckinsey.com/business-functions/op%ADerations/our-insights/risk-resilience-and-re%ADbalancing-in-global-value-chains>.
- 25 "Cincuenta Empresas del Exterior, con Interés en Colombia," Portafolio, 7 de septiembre 2020, <https://www.portafolio.co/economia/cincuenta-empresas-del-exterior-con-interes-en-colombia-544378>.
- 26 "U.S. Government Announces Bilateral Initiative to Advance Rural Development in Colombia," Embajada de EE.UU. en Colombia, 18 de Agosto de 2020, <https://co.usembassy.gov/u-s-government-announces-bilateral-initiative-to-advance-rural-development-in-colombia/>.
- 27 "Rural Finance Loan Portfolio Guarantee," USAID, última actualización el 12 de julio de 2021, <https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/red-rural-finance-loan-portfolio-guarantee>.
- 28 "The Enterprise Funds in Europe and Eurasia: Successes and Lessons Learned," USAID, 12 de septiembre de 2013, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/EE_Enterprise_Funds-LessonsLearned.pdf.
- 29 "Inaugural Impact Report 2020: Executive Summary" and "What is Our Mission," Tunisian American Enterprise Fund, 2021, <https://www.taefund.org/en/mission-2/>.
- 30 "The Untapped Potential of the US-Colombia Partnership, Atlantic Council," septiembre de 2019, <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/untapped-potential-us-colombia-partnership/>.
- 31 "Listado de las 80 Víctimas de Violencia Homicida en el Marco del Paro Nacional al 23 de Julio"; Mejía, "Tendencia Económica Editorial: Costos Económicos del Paro Nacional."
- 32 Luis Fernando Mejía, et. al., "Rigideces del Mercado Laboral en Colombia: Tendencias, Perspectivas y Recomendaciones," in *Descifrar El Futuro: La Economía Colombiana en los Próximos Diez Años*, Fedesarrollo, (Penguin Random House, abril de 2021), págs. 261-319.
- 33 Miguel Benítez, et. al., "Reformas para una Colombia post-COVID 19: Hacia un Nuevo Contrato Social," La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, 12 de abril de 2021, https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4103/Repor_Abril_2021_Mej%Eda_et_al.pdf?sequence=9.
- 34 "United States Announces Additional Humanitarian and Development Assistance for People Affected by The Ongoing Crisis in Venezuela and the Region," USAID, nota de prensa, 22 de septiembre de 2021, <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-22-2021-us-announces-additional-humanitarian-assistance-venezuela>.
- 35 Dany Bahar and Meagan Dooley, "Venezuelan Refugees and Their Receiving Communities Need Funding, Not Sympathy," Brookings, actualizado en febrero de 2021, <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/02/26/venezuelan-refugees-and-their-receiving-communities-need-funding-not-sympathy/>; The Untapped Potential of the US-Colombia Partnership.

- 36 "Actualización de la Financiación—RMRP," Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, última actualización el 1 de octubre de 2021, <https://www.r4v.info/es/financiamiento>. Calculado utilizando 1.440 millones de dólares de necesidades totales de RMRP para unos 5,4 millones de refugiados venezolanos.
- 37 Ibid.
- 38 El Potencial Desaprovechado de la Alianza entre Estados Unidos y Colombia.
- 39 En el texto del acuerdo de paz se incluyeron un total de quinientas setenta y ocho estipulaciones. "The Colombian Final Agreement in the Era of COVID-19: Institutional and Citizen Ownership is Key to Implementation," Peace Accords Matrix Barometer Initiative and Kroc Institute for International Peace Studies, 20 de mayo de 2021, <https://doi.org/10.7274/r0-cffp-qr07>.
- 40 Ibid.
- 41 Juan Carlos Garzón Vergara, "En 2021 la Confrontación Armada Disminuye, pero la Violencia Contra Civiles Aumenta," Fundación Ideas Para la Paz, 28 de mayo de 2021, <https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2001>.
- 42 Juan Carlos Garzón Vergara, "Un Clima Peligroso: Deforestación, Cambio Climático y Violencia Contra los Defensores Ambientales en la Amazonía Colombiana," Fundación Ideas Para la Paz, 30 de septiembre de 2021, <https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2058>.
- 43 "Homicidios Intencionales (por Cada 100.000 Habitantes)—Colombia," Banco Mundial, 2018, <https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5?locations=CO>.
- 44 ¿Qué hay Detrás del Aumento de Homicidios en lo que Va del Año? Tiempo, 1 de julio de 2021, <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/balance-de-homicidios-en-colombia-aumentaron-21-en-2021-600015>.
- 45 "Defensoría del Pueblo Presenta Reporte de Conductas Vulneratorias contra Líderes Sociales Durante el Primer Semestre de 2021," Defensoría del Pueblo Colombia, 25 de agosto de 2021, <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10368/Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-presenta-report-de-conductas-vulneratorias-contra-l%C3%ADderes-sociales-durante-el-primer-semester-de-2021-l%C3%ADderes-sociales-Defensor%C3%ADa-informe.htm>; "Líderes Sociales, Defensores de DD.HH y Firmantes de Acuerdo Asesinados en 2021," INDEPAZ, 2 de octubre de 2021, <http://www.Indepaz.Org.Co/Lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/>.
- 46 Vergara, "En 2021 la Confrontación Armada Disminuye, pero la Violencia Contra Civiles Aumenta."
- 47 Ibid.
- 48 "Stabilization Assistance Review: A Framework for Maximizing the Effectiveness of U.S. Government Efforts to Stabilize Conflict-Affected Areas," Departamento de Estado de los EE.UU., 2018, <https://www.state.gov/reports/stabilization-assistance-review-a-framework-for-maximizing-the-effectiveness-of-u-s-government-efforts-to-stabilize-conflict-affected-areas-2018/>.
- 49 "The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004," Departamento de Justicia de EE.UU., 2004, <https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1282>.
- 50 "Foreign Military Training Report: Fiscal Years 2018–2019," Departamento de Estado de EE.UU., y Departamento de Defensa de EE.UU., 2019, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/FMT_Volume-I_FY2018_2019.pdf#page=404; "Central American Police Training: GAO-18-618," Government Office of Accountability, septiembre de 2018, <https://www.gao.gov/assets/gao-18-618.pdf>; "Standing Against Gender-Based Violence in the Dominican Republic," Agencia Internacional para el Desarrollo de EE.UU. US, 29 de marzo de 2021, <https://medium.com/usaid-2030/standing-against-gender-based-violence-in-the-dominican-republic-2a813de03711>.

**CHAIRMAN**

*John F.W. Rogers

EXECUTIVE CHAIRMAN EMERITUS

*James L. Jones

PRESIDENT AND CEO

*Frederick Kempe

EXECUTIVE VICE CHAIRS

*Adrienne Arsht

*Stephen J. Hadley

VICE CHAIRS

*Robert J. Abernethy

*Richard W. Edelman

*C. Boyden Gray

*Alexander V. Mirtchev

*John J. Studzinski

TREASURER

*George Lund

DIRECTORS

Stéphane Abrial

Todd Achilles

*Peter Ackerman

Timothy D. Adams

*Michael Andersson

David D. Aufhauser

Barbara Barrett

Colleen Bell

Stephen Biegun

*Rafic A. Bizri

*Linden P. Blue

Adam Boehler

Philip M. Breedlove

Myron Brilliant

*Esther Brimmer

R. Nicholas Burns

*Richard R. Burt

Teresa Carlson

James E. Cartwright

John E. Chapoton

Ahmed Charai

Melanie Chen

Michael Chertoff

*George Chopivsky

Wesley K. Clark

*Helima Croft

Ralph D. Crosby, Jr.

*Ankit N. Desai

Dario Deste

*Paula J. Dobriansky

Joseph F. Dunford, Jr.

Thomas J. Egan, Jr.

Stuart E. Eizenstat

Thomas R. Eldridge

Mark T. Esper

*Alan H. Fleischmann

Jendayi E. Frazer

Courtney Geduldig

Meg Gentle

Thomas H. Glocer

John B. Goodman

*Sherri W. Goodman

Murathan Günal

Amir A. Handjani

Frank Haun

Michael V. Hayden

Tim Holt

*Karl V. Hopkins

Andrew Hove

Mary L. Howell

Ian Ichnatowycz

Mark Isakowitz

Wolfgang F. Ischinger

Deborah Lee James

Joia M. Johnson

*Maria Pica Karp

Andre Kelleners

Henry A. Kissinger

*C. Jeffrey Knittel

Franklin D. Kramer

Laura Lane

Jan M. Lodal

Douglas Lute

Jane Holl Lute

William J. Lynn

Mian M. Mansha

Marco Margheri

Michael Margolis

Chris Marlin

William Marron

Gerardo Mato

Timothy McBride

Erin McGrain

John M. McHugh

Eric D.K. Melby

*Judith A. Miller

Dariusz Mioduski

*Michael J. Morell

*Richard Morningstar

Georgette Mosbacher

Dambisa F. Moyo

Virginia A. Mulberger

Mary Claire Murphy

Edward J. Newberry

Franco Nuschese

Joseph S. Nye

Ahmet M. Ören

Sally A. Painter

Ana I. Palacio

*Kostas Pantazopoulos

Alan Pellegrini

David H. Petraeus

W. DeVier Pierson

Lisa Pollina

Daniel B. Poneman

*Dina H. Powell

McCormick

Ashraf Qazi

Robert Rangel

Thomas J. Ridge

Gary Rieschel

Lawrence Di Rita

Michael J. Rogers

Charles O. Rossotti

Harry Sachinis

C. Michael Scaparrotti

Ivan A. Schlager

Rajiv Shah

Gregg Sherrill

Ali Jehangir Siddiqui

Kris Singh

Walter Slocombe

Christopher Smith

Clifford M. Sobel

James G. Stavridis

Michael S. Steele

Richard J.A. Steele

Mary Streett

*Frances M. Townsend

Clyde C. Tuggle

Melanne Verveer

Charles F. Wald

Michael F. Walsh

Ronald Weiser

Olin Wethington

Maciej Witucki

Neal S. Wolin

*Jenny Wood

Guang Yang

Mary C. Yates

Dov S. Zakheim

HONORARY DIRECTORS

James A. Baker, III

Ashton B. Carter

Robert M. Gates

James N. Mattis

Michael G. Mullen

Leon E. Panetta

William J. Perry

Condoleezza Rice

Horst Teltschik

William H. Webster



The Atlantic Council is a nonpartisan organization that promotes constructive US leadership and engagement in international affairs based on the central role of the Atlantic community in meeting today's global challenges.

© 2021 The Atlantic Council of the United States. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from the Atlantic Council, except in the case of brief quotations in news articles, critical articles, or reviews. Please direct inquiries to:

Atlantic Council

1030 15th Street, NW, 12th Floor,
Washington, DC 20005

(202) 463-7226, www.AtlanticCouncil.org